

El club de los fugadores

La Argentina macrista es tierra arrasada. Desde las bases más golpeadas se reclama la aplicación de la Ley de Emergencia Alimentaria sancionada por el Congreso. UNICEF ha dicho que, en nuestro país, las personas con deficiencias en la alimentación aumentarán de 8 a 14 millones como efecto de las políticas aplicadas en los últimos años. No es extraño, ya que la inflación de septiembre trepó al 5,9% y acumula un lapidario 53,5% interanual. Como si esto fuera poco, el default sobrevuela nuestra existencia y, de seguir así, el abismo nos sorprenderá en cualquier lugar...

Mientras tanto, en la reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) realizada en septiembre y en el coloquio de IDEA que se desarrolló en Mar del Plata, el establishment en pleno analiza la realidad y nos da su visión sobre las posibles soluciones. Estuvieron todos y no faltaron las críticas. Durante el primer encuentro de septiembre, Luis Pérez Companc (presidente del Grupo Pérez Companc) dijo estar “desmotivado”, entre otras cosas, porque los consumidores eligen segundas y terceras marcas. Alfredo Coto (dueño de la cadena de supermercados Coto) parecía indignado al afirmar que no hay un país más desorganizado que el nuestro. Al llegar su turno, Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint) diagnosticó que hubo una pérdida de confianza que es necesario recuperar. El CEO de Globant, Martín Migoya, afirmaba escandalizado que los empresarios no saben a cuánto va a estar el dólar, que carecemos de planificación y de moneda confiable, y que todo este tiempo ha sido muy difícil para ellos. Cristiano Rattazzi (presidente de Fiat) no se privó de decir lo suyo: este no es el mejor momento; otros años se tomaba mucha más gente; a los autopartistas les está yendo muy mal; un país con esta inflación no es previsible y, remató, las cuentas de una empresa no tienen valor. Las quejas llegaron al sector inmobiliario. Eduardo Constantini (dueño de Nordelta) se quejó porque las ventas están muy bajas. La presidenta de Droguerías del Sur, María Luisa Macchiavello, casi daba pena cuando afirmó: “Es difícil pensar cómo trabajar todos los días”. El auditorio contó, además, con la presencia de otros empresarios: Héctor Magnetto (CEO del Grupo Clarín), Alejandro Bulgheroni (presidente de Pan American Energy) y Gustavo Grobocopatel (de Los Grobo), entre otros. Como era de esperar, el coloquio de IDEA arrancó con el reclamo constante de estos empresarios argentinos: hay que bajar los impuestos...

Parece hasta una obviedad sostener que una catástrofe como la que vive Argentina no puede ser ajena al comportamiento de esta elite económica. Tanto la lógica como el sentido común se niegan a aceptar que los responsables puedan ser los trabajadores (porque no se flexibilizan), los jubilados (porque cobran del Estado después de haber aportado), los sindicatos (porque defienden a sus representados) o los movimientos sociales (que expresan los reclamos de los más vulnerables). Tampoco parece lógico pensar que el dólar se dispare por las conductas inapropiadas que Joaquín Morales Solá (con mucho clasismo y desprecio social) les achaca a choferes y mucamas.

Es entonces cuando debemos mirar y preguntarnos si, más allá de los ciclos económicos, existen conductas repetidas por los que detentan verdadero poder que resultan dañinas y estructuralmente perjudiciales para el desarrollo de la Argentina, y que se vinculan directamente con las crisis que venimos soportando en los últimos 43 años.

Si hay algo que caracteriza el comportamiento de estos actores económicos desde 1976, tanto en etapas de neoliberalismo como de Estado Interventor, de expansión económica como de contracción de la actividad, es su permanente tendencia a **fugar capitales**. Si bien es cierto que en cualquier país del mundo las crisis financieras producen una considerable fuga al exterior, en el caso argentino esta se constituye en un elemento estructural, ya que el fenómeno se observa

independientemente de los ciclos económicos y aún en períodos de estabilidad financiera y crecimiento.

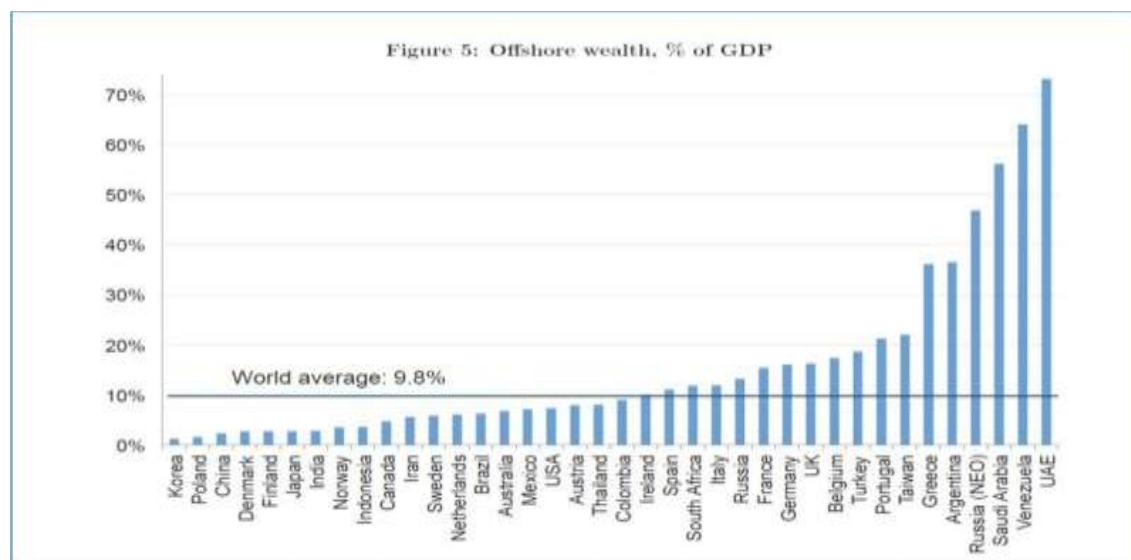
¿Cuáles son algunos datos con los que contamos? Entre 1976 y 2001 se fugaron del país 136.000 millones de dólares. Durante el año 2001 (que terminó con la crisis que pauperizó a los más y licuó los ahorros de los sectores medios) y gracias a la información privilegiada con la que contaban (que no estaba al alcance de los simples ahorristas), estos grupos sacaron de Argentina 29.913 millones de dólares, cifra más que relevante si tenemos en cuenta que las reservas del BCRA a fines del mismo año apenas pasaban los 15.000 millones de dólares. El 87,3% de ese monto fue fugado por empresas, todas presentes en el cónclave de AEA y en el coloquio de IDEA. Veamos algunos ejemplos ilustrativos: Pecom Energía SA fugó del país 1.890.697.730 dólares; Telefónica de Argentina SA, 1.559.852.695 dólares; YPF SA (en manos españolas), fugó D1.058.024.854; Cablevisión, 136.379.627 dólares; Fiat Auto Argentina, fugó D67.593.631; Autopistas del Sol (por ese entonces de la familia Macri), D46.722.901; Ledesma SA, 38.974.740 dólares; Grupo Clarín SA, fugador de 10.190.504 dólares; Techint, D9.747.322; Socma Inversora SA, D9.316.000; Socma Americana SA, D6.415.344; Los Grobo Agropecuaria SA, con una fuga de 6.213.053 dólares; Correo Argentino SA, D4.891.398; Coto SA, D63.648.845. Esto en cuanto a las empresas. Pero el 12,7% de las divisas que, a lo largo de 2001, salieron del país corresponden a personas físicas, en su gran mayoría dueños, familiares de estos o CEOs de grandes empresas y conglomerados. A la cabeza de todos ellos figura Jorge Gregorio Pérez Companc, con un monto fugado de D47.116.061; Jorge Blanco Villegas (integrante de la Familia Macri y uno de los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires), que fugó D9.865.108; Luis Pérez Companc (el que en AEA se declaró “desmotivado”...), fugó en 2001 D6.115.851; Eduardo Constantini, D3.900.000. La lista también incluye algunos aspectos pintorescos, como la presencia de Susana Gimenez (D1.858.451) o Gustavo Arribas (D5.573.750).

Durante el kirchnerismo, y más allá de los diferentes momentos que caracterizan al período, la fuga continuó, totalizando 129.119 millones de dólares a fines de 2015. En ese año, el INDEC calculaba que los depósitos de argentinos en el exterior alcanzaban los 232.411 millones de dólares, en tanto que otras mediciones elevaban la cifra a D 399.062 millones. En los 4 años del gobierno macrista el fenómeno se acrecentó al calor de la liberalización del mercado financiero: se fugaron D 133.313 millones. Los nombres se repiten en todo el período (1976 – 2019) y son siempre los mismo: un conjunto reducido de 200 grandes empresas y otras tantas familias a ellas vinculadas.

Frente a esto resulta necesario señalar que tal conducta repetida es la más importante restricción al desarrollo por las consecuencias que acarrea. Por un lado, reduce la disponibilidad de divisas para la economía doméstica (utilizadas para el pago de la deuda y para las importaciones), lo que conduce a la restricción externa de la que tanto se habla hoy. También disminuye drásticamente la inversión, necesaria tanto para la generación de empleo como para crecimiento del PBI. Además, priva al Estado de importantes recursos que este capta con los impuestos, ya que la mayoría de los giros al exterior se realizan a través de plataformas montadas para la evasión y hacia paraísos fiscales. Por otro lado, la fuga en épocas de caída de la economía (como la actual) se financia con un masivo endeudamiento que compromete el futuro de todos. En clave social, significa una importante transferencia de recursos desde los asalariados hacia el capital concentrado. Esto es, los pobres (que aumentan aceleradamente) son cada vez más pobres, en tanto que los ricos son pocos y cada vez más ricos.

Tener en claro esto sirve para responder adecuadamente al reclamo empresarial sobre la necesidad de bajar los impuestos. Como reconociera Beatriz Sarlo en una entrevista reciente a Alberto

Fernández, la carga impositiva en Argentina no es elevada y nunca lo fue. En un comparativo encontramos que la media de OCDE es del 34,2% del PBI, en tanto que en 2015 la nuestra se aproximó al 32% para disminuir durante la gestión de Macri al 30,8% en 2017. El problema no radica entonces en la alta presión impositiva sino, más bien, en los descomunales índices de evasión por parte del capital más concentrado. En 2017, el National Bureau of Economic Research (NBER) calculó que un equivalente al 38% del PBI argentino se encuentra depositado en paraísos fiscales. La media mundial es de 9,8%.



Fuente: Nacional Bureau of Economic Research (NBER)

Esta conducta delictiva produce una profunda e injusta distorsión en la distribución de las cargas. Trabajadores, PyMES y hasta jubilados sufren una presión muy superior al 30% sólo para compensar la evasión que se da en los sectores de más altos ingresos.

En 2005, la Cámara de Diputados recibía el Informe Final de la investigación sobre fuga de divisas en 2001. El Dr. Eduardo Di Cola, presidente de la Comisión Investigadora, se preguntaba: *“¿Qué Nación puede erigirse como tal si buena parte del dinero que genera la producción y el consumo de todo un país desaparece del circuito nacional para nunca más volver?”* A la luz de la crisis actual, la pregunta de Di Cola requiere respuestas y soluciones urgentes...



Coordinación de Estudios sobre Evasión, Fuga y deuda en Argentina

Lic. Lidia Rodríguez Olives